LOS TÉRMINOS DE ALICANTE A LO LARGO DE LA EDAD MODERNA

M^a Carmen DUEÑAS MOYA

Universidad de Alicante

Resumen

El proceso segregacionista que tuvo lugar a finales del Quinientos –y que se extendió durante los tres siglos siguientes–, introdujo importantes modificaciones territoriales y jurisdiccionales en el término de Alicante. Con las páginas siguientes se pretende contribuir al estudio de todas aquellas poblaciones que en los comienzos de la Edad Moderna estuvieron integradas en el territorio ciudadano y, paulatinamente, fueron desgajándose del mismo. Se trata de analizar la significación que tuvo para las gentes de estos lugares su pertenencia a los términos particular o general de Alicante, más concretamente: de qué manera iniciaron su periplo histórico como municipios independientes y cuáles fueron las condiciones impuestas a cambio de ello; en qué medida alcanzaron realmente la facultad de autogobernarse, o qué conflictos les enfrentaron con mayor frecuencia a la ciudad. Y, sin embargo, pese a las múltiples discrepancias internas, cuestiones como las aguas de riego, los pastos y las contribuciones fiscales, entre otras, aglutinaron los intereses de estas poblaciones en torno a Alicante, como cabecera, construyendo un sólido frente común capaz de oponerse a otras localidades periféricas.

Abstract

The segregationist process that took place towards the end of the 16th Century –and lasted over the following three hundred years– introduced important territorial and jurisdictional modifications in the municipality of Alicante. The following pages pretend to contribute to the study of the villages which, at the beginning of the Modern Age were integrated inside the city territory, gradually separated themselves from the city. We try to analyze the significance of belonging to a particular or to a general municipality bore for these people. And more specifically in which way they started their historical peregrination as independant towns, and under what imposed conditions; to what extent they really reached the faculty to self govern themselves, or which were the disputes that most often confronted them with the city. Nevertheless, and in spite of the multiple internal disagreements, matters such as irrigation waters, pastures and taxes, among others, agglutinated these towns with Alicante as the visible head, building a common front capable of withstanding other peripheral localities.

INTRODUCCIÓN

En 1252 Alfonso X dotaba a la entonces villa de Alicante de un término general que constituiría su base territorial hasta la desintegración del Antiguo Régimen. Sin embargo, y a pesar de que el espacio en su conjunto no sufrió grandes alteraciones, a lo largo de toda la Edad Moderna se fueron produciendo fragmentaciones internas que cristalizaron en la formación de diversos municipios, acabando por formar un mosaico de términos particulares que permanecieron englobados dentro del general.

El objeto de estas páginas es precisamente contribuir al estudio del que se denominara *término general* de Alicante —y de las poblaciones que lo integraron— en dos aspectos fundamentales: el jurisdiccional y el territorial.¹ Se trata de analizar la repercusión que tuvo para las gentes de estos lugares su pertenencia al término general o a los distintos términos particulares que lo formaron, y poner de manifiesto cuáles fueron los factores que les unieron y les enfrentaron a lo largo de su devenir histórico.

Sabemos que a comienzos del siglo XVI la general contribución de Alicante —o *término general*— abarcaba las poblaciones de Alicante, Agost, Busot y Monforte. Sabemos, igualmente, que a principios del siglo XIX, la denominada *gobernación* de Alicante —que comprendía el mismo espacio geográfico— incluía, además de la propia ciudad, las poblaciones realengas de Monforte, Muchamiel y San Juan/Benimagrell, y las de señorío de Agost, Busot y Villafranqueza.

¿Qué había cambiado, por tanto, durante esos tres siglos? Resulta evidente que se habían producido varias egresiones de aldeas anteriormente incluidas en el término de Alicante, que consiguieron alcanzar la categoría de municipios. Pero este hecho no tuvo lugar de forma lineal, hubo avances y retrocesos: poblaciones como Muchamiel y San Juan —con su anexo Benimagrell— después de separarse de la ciudad se vieron obligadas a unirse otra vez a la misma por cuestiones fundamentalmente económicas; también se produjo la fundación de nuevos municipios, como fueron los casos de Villafranqueza y del Pueblo Nuevo de Peñacerrada —éste último ubicado en el término de Muchamiel—.

Por tanto, los objetivos primordiales de nuestro trabajo se centraron en delimitar el territorio de los diferentes términos y en especificar las competencias jurisdiccionales adquiridas por cada uno de los municipios emergentes; el hecho de alcanzar esta condición no suponía una separación completa del municipio matriz y las relaciones entre ambos, como veremos, se articulaban de forma distinta dependiendo de cual fuera la categoría alcanzada por los nuevos municipios: de realengo —*universitat* o villa— o de señorío —con jurisdicción alfonsina o baronal—.²

1. El presente trabajo es una síntesis de la Memoria de Licenciatura que, bajo la dirección del Dr. D. Primitivo Pla Alberola, defendí en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante el 17 de junio de 1996 con el título *Los términos de Alicante a lo largo de la Edad Moderna*, y para cuya realización conté con una ayuda de investigación otorgada por el Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert».
2. Sobre las características de las *universitats* y las villas véase BERNABÉ GIL, D.: «Universidades y Villas. Notas sobre el proceso de segregación municipal en el realengo valenciano (siglos XVI y XVII)», en *Revista de Historia Moderna*, 6/7, Alicante, 1986-87, págs. 11-38 y del mismo autor: «Una coexistencia conflictiva: municipios realengos y señoríos de su contribución general en la Valencia foral», en *Revista de Historia Moderna*, nº 12, Alicante, 1993, págs. 11-78; en lo referente a las distintas jurisdicciones puede consultarse: PLA ALBEROLA, P.J.: *Conflictos jurisdiccionales en un gran señorío va-*

Todo lo concerniente a las prerrogativas jurisdiccionales adquiriría, de inmediato, gran relevancia; quienes alcanzaban algún tipo de atribuciones procuraban afanosamente conservarlas –cuando no aumentarlas– y esto, a menudo, enturbiaba las relaciones con otros poderes. A ello se unía la falta de una definición clara entre las diferentes jurisdicciones que permitiera la calificación de cada nivel jurisdiccional. Esa insuficiencia legal provocó numerosos conflictos entre las distintas instancias, hecho que se vio reforzado en el reino de Valencia debido a la existencia de un entramado jerárquico más complejo que en otras zonas, al contar, además, con un grado intermedio de competencias como era el mantenido por los señores alfonsinos y las *universitats*.

Por ello, se nos muestran con cierta frecuencia situaciones tales como señores que intentaban sobrepasarse en sus derechos lesionando así los de la ciudad cabecera y también, en sentido opuesto, oficiales ciudadanos que se arrogaban facultades propias de los señoríos alfonsinos, *universitats* o villas de su término amparándose en esa ambigüedad legislativa que, a veces, malinterpretaban de forma intencionada.

Estas divergencias son una constante en las relaciones mantenidas entre la ciudad de Alicante y las poblaciones que giraban en su entorno tal y como se pretende poner de relieve. Para su estudio hemos ahondado en la historia de cada una de ellas, deteniéndonos en aquellos aspectos que las vinculaban a la ciudad, y tomando como punto de mira el hito que supuso su egresión como municipios independientes.

Conocer las fechas en que se materializaron las segregaciones municipales también resulta de enorme interés para realizar el análisis demográfico de la zona con una mayor precisión: debe tenerse en cuenta si, al comparar los efectivos de Alicante en dos momentos concretos de la Edad Moderna, estamos considerando en ambos casos un mismo territorio. En este sentido, las interpretaciones de censos y vecindarios que se vienen ofreciendo, suelen reproducir una serie de tópicos que deben ser matizados. Ésta fue otra de las claves iniciales a la hora de abordar nuestra Memoria de Licenciatura, y no es casual que la dirección de la misma haya corrido a cargo de un estudioso en historia de la población.

LOS TÉRMINOS TERRITORIALES: EL AMOJONAMIENTO GENERAL

Partimos de la definición de *término* entendiéndole como aquel territorio subordinado a una autoridad y delimitado por una línea divisoria marcada por mojones u otras señales –frecuentemente accidentes geográficos relevantes–. Así, todos los residentes de un término, y dependiendo de si son vecinos o no, tienen una serie de derechos, con la contrapartida de las correspondientes obligaciones; la intromisión de personas ajenas violando los derechos de aquéllos supone una transgresión del ordenamiento legal vigente en cada momento, penada con las oportunas sanciones.

El *término general* nace como heredero de las divisiones administrativas de los últimos tiempos del dominio musulmán y que, tras la Reconquista, se asignaba mediante privilegio real a una ciudad o villa. Era, en definitiva, la concesión de un alfoz

lenciano. *El condado de Cocentaina ante la consolidación del absolutismo*, tesis doctoral inédita, Facultad de Filosofía y Letras de Alicante, 1985, y los artículos: «Los señoríos de jurisdicción civil en el derecho foral valenciano», en *Studia Historica*, vol. VI, Salamanca, 1988, págs. 351-360 y «La jurisdicción alfonsina como aliciente para la recolonización del territorio», en *Revista de Historia Moderna*, nº 12, Alicante, 1993, págs. 79-139.

para favorecer a sus moradores recién asentados y como reconocimiento a la lealtad mostrada a la corona en las guerras contra el Islam:

«Conoscida cosa sea a todos los homnes questa carta vieren, como yo don Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo (...), por fazer bien et mercet a todos los cavalleros et a los cibdadanos et a los marineros et a todos los pobladores del Consejo de la villa de Alicante, et a los que agora hi son et serán daqui adelante pora siempre jamás, assí de la villa como de aldeas, por serviçio que me farán et por acreçerles en sus bienes y en sus franquezas, doles et otórgoles que hayan por aldeas et por sus términos Noella et Asp el Viejo et Asp el Nuevo et Agost et Busot et Aguas»³.

Los cambios observados en estas demarcaciones no resultaron demasiado significativos respecto a la etapa anterior; los propios documentos suelen referirse a ello al indicar: «así como nunca mexor las hovieron en tiempo de moros».⁴

En el caso de Alicante la merced fue otorgada por el rey Alfonso X de Castilla, en 1252; Orihuela también se lo debe al mismo monarca por privilegio del año 1266;⁵

3. A(rchivo) M(unicipal) A(licante), Arm. 5, Libro 50, fol. 4.

4. Después de redactado el presente trabajo he tenido conocimiento de un artículo de AZUAR RUIZ, R.: «Ruptura y formación de un espacio feudal. Alicante-1296», en *Quaderns de Midjorn*, 3, en el que, por el contrario, se plantea que el término conferido a Alicante después de la Reconquista respondía a una creación «ex novo», sin vinculación con el distrito islámico. (Agradezco a su autor la posibilidad de conocer este artículo, todavía en prensa).

5. BERNABÉ GIL, D.: «Una coexistencia conflictiva: municipios realengos y señoríos de su contribución general en la Valencia foral», en *Revista de Historia Moderna*, nº 12, 1993, pág. 65.

Xátiva lo obtuvo de Jaime I el Conquistador, mediante documento de 1250.⁶ La ciudad o villa favorecida por tal concesión ejercía una total jurisdicción sobre los lugares de realengo que se le asignaba, a los que entendía como meras *aldeas*. Cuestión distinta eran los señoríos incluidos en sus términos: su dependencia de la ciudad estaba en función de las atribuciones de que gozaran los titulares de esos lugares, pudiendo incluso tener unas prerrogativas casi idénticas a las de la misma ciudad.

Teóricamente, los vecinos de las poblaciones integrantes del término general mantenían algunas franquezas reales equiparables a las que disfrutaban los de la ciudad, y prohibidas a otros de lugares forasteros. Así sucedía, por ejemplo, con el aprovechamiento de los pastos y demás *amprius*, cuyo uso común benefició a todas las localidades del término:

*«Que los térmens generals de la ciutat de Alacant y de Sanct Juan y Benimagrell sien y resten, com vuy són, comuns per a tots los vehins y habitants de Alacant e de Sanct Juan y Benimagrell e de tots altres llocs que estan situats dins los dits térmens generals de Alacant, per a pasturar, amprivar y servir-se de aquells segons que fins ara se ha practicat y se practica, ayxí de pasturar, portar sal de les salines, anar als flums y a la mar per sos camins y veredes, si e segons y de la manera que per fur y privilegis del regne de València està dispost».*⁷

También pudieron disfrutar del derecho de embarcar o vender vinos y otros frutos en Alicante:

*«no puga entrar en la present ciutat de Alacant, vil·la de Muchamel, universitats de Monfort, Sant Juan y de Benimagrell, llocs de Villafranqueza, Busot, llogaret y carrer de Agost, y en tots sos termes per terra, ví, venema, vinagre, beuragies, aigüetes y aiguarent, tant per a vendre quant per a usos propis, que no sia collit o fet y fetes de la collita y terres de dites present ciutat, vil·la, universitats, llocs y carrer y sos termes».*⁸

Sin embargo, no hay que engañarse, pues, a pesar de que sobre el papel resultaban ventajas evidentes, se convertían a menudo en cuestiones de grave enfrentamiento entre estos municipios y la ciudad.

El *término particular* fue surgiendo a partir de la evolución del anterior, al irse segregando una serie de localidades que lograron adquirir personalidad jurídica propia en sus distintos niveles. Aquellos otros que, por contra, se mantuvieron adscritos como aldeas a la propia ciudad o villa matriz quedaron englobados en su término particular, esto es, aquel donde el justicia, jurados y almotacén de la ciudad o villa ejercían una jurisdicción plena.

Por tanto, sólo se pudo hablar de término particular de Alicante cuando los municipios que se fueron separando consiguieron formar el suyo propio —bien por adquirir rango municipal dentro del realengo, bien por ser adjudicados a señores que fueron alcanzando determinadas competencias jurisdiccionales—. Con todo, unos y otros

6. SARTHOU CARRERES, C.: *Datos para la Historia de Játiva*, I, Játiva, 1933, pág. 407.

7. AMA., Arm. 5, Libro 49: *Privilegio de erección en universidad del lugar de San Juan y Benimagrell*, art. 16.

8. A(rchivo) H(istórico) N(acional), *Consejos*, Legajo 22.071, *Capítols pera el govern de la Inibició del ví foraster de la ciutat de Alacant, fets per los Il·lustres justícia, jurats, síndic y junta de interesats, aprovats per lo rey nostre senyor*.

siguieron integrados en la general contribución, a la que no dejaron de pertenecer en virtud del real privilegio originario de 1252.

Sirvan estas breves notas para introducir un elemento derivado del aspecto territorial, es decir, su delimitación: los instrumentos jurídicos precisos para alegar la pertenencia de unas tierras, el hecho de demarcarlas y la acción de señalarlas mediante la fijación de mojones, es lo que se conoce como *apeo*, *deslinde* y *amojonamiento* de un término.

Este hecho, importante en el mundo actual, cobraba una mayor trascendencia en momentos históricos en los cuales la tierra era el pilar sobre el que se asentaba toda la estructura social. Las desavenencias por cuestiones territoriales aparecen de forma reiterada sobre todo en las sociedades agrarias y podía afectar tanto a particulares como a municipios e, incluso, a contribuciones vecinas. Es razonable pensar que una de las primeras causas de enfrentamiento entre poblaciones limítrofes fuera, justamente, determinar dónde acababa el territorio de una y dónde empezaba el de la otra. Más aún cuando ese límite suponía disponer de una zona de pastizales más o menos amplia y de la posibilidad de recolección de otras utilidades rústicas –leñas, barrilla, esparto, etc.–, y especialmente en épocas críticas cuando las dificultades económicas se acrecentaban todavía más.

En estos casos, ante lo imperioso de las necesidades más elementales, podía resultar una práctica relativamente sencilla el mover algunos mojones que ampliaran sus terrenos aprovechables; a veces, el interés no resultaba tan primario y se centraba

en atraer hacia el municipio los impuestos que generaban esas tierras. Así ocurrió en diversos lugares: por ejemplo, en las tierras de la sierra del Moresno, situadas entre Monforte y Alicante, había unas heredades, al parecer ya en el término de la ciudad, cuyos propietarios venían pagando el equivalente en Monforte, de donde eran vecinos, aduciendo no estar claros los límites.⁹ Las autoridades ciudadanas acusaban al cabildo de dicha población de valerse precisamente del hecho de ser vecinos suyos para desviar en su favor el pago del gravamen. También en la linde con la villa de Elche o con la de Villafranqueza se produjeron enfrentamientos similares.

Otras repercusiones importantes del hecho territorial fueron las cuestiones referentes a las aguas del río Monnegre o al sugestivo tema de los vinos que, igualmente, afectaron al conjunto de vecinos del término general de Alicante. En el primero de los casos, se vieron beneficiados del aprovechamiento de las aguas del citado río por la donación que hiciera Alfonso X a favor de la ciudad y, así, quedaron privados de la utilización de su caudal los agricultores de las poblaciones próximas al curso alto del río, dando lugar a que éstos, sintiéndose agraviados, llevaran a cabo la construcción de azudes y presas con el fin de retener parte de esas aguas. El segundo, tenía como fundamento un privilegio de Fernando el Católico relativo a la distribución y comercialización del vino. Éste era un producto abundante y muy estimado en toda la huer-ta alicantina que los terratenientes de la misma protegieron de la competencia de otras zonas próximas con fuerte tradición vinícola como Novelda, Aspe, Monóvar, etc., impidiendo la introducción en la ciudad de vinos o cosechas que no hubieran sido elaborados o recolectados en las tierras comprendidas dentro de su jurisdicción.

Todas estas cuestiones fueron motivo de enconados pleitos –cuyas peculiaridades comentaremos más adelante–, y que tienen su origen en una cierta imprecisión territorial provocada por el paso del tiempo y las continuas transgresiones que, poco a poco, iban desdibujando las líneas del término.

Llegados a tal situación, eran los propios interesados –sobre todo aquellos que sentían más perjudicados sus derechos– los que reclamaban la ejecución de un nuevo apeo, deslinde y amojonamiento que restableciera las lindes en su debido lugar.

No vamos a entrar en la descripción de la compleja mecánica del amojonamiento como tal¹⁰, cuyos aspectos más relevantes fueron ya tratados en un artículo anterior¹¹, pero sí a comentar algunos datos genéricos que den idea de su laboriosidad. Se trataba de unas actuaciones lentas y delicadas, realizadas por una comisión presidida por un alto cargo político –normalmente el corregidor o máximo responsable del realengo más cercano–, personaje al que, además, habían de adornar ciertas cualidades como la mesura, ecuanimidad y celo, necesarias para llevar a buen puerto este tipo de traba-

9. AMA., Arm. 14, Libro 22: *Primera copia original del apeo y deslinde del término de la Ilustre ciudad con el de Monforte*. 1775

10. Este proceso se ha podido reconstruir gracias a una veintena de legajos custodiados en el Archivo Municipal de Alicante, en los que se conservan íntegramente las diligencias seguidas en el apeo de 1772-1775 y también a las Actas de deslinde y mapas realizados a finales del siglo XIX por el entonces Instituto Geográfico y Estadístico, que hoy permanecen archivadas en el Instituto Geográfico Nacional, de Madrid.

11. DUEÑAS MOYA, M^a C.: «El amojonamiento: solución a un conflicto cotidiano», en *Canelobre*, n^o 29-30, Alicante, 1995, págs. 207-216.

jos. La audiencia estaba integrada por diez o más personas: unos funcionarios fijos, como el escribano, alguacil y maestro alarife; otros, en número variable, representando a las dos o más partes en conflicto: si el lugar era de señorío acudían uno o dos apoderados del señor y si era de realengo asistían dos representantes del cabildo; por parte de Alicante acudían, igualmente, el síndico procurador de la ciudad y un jurado –o regidor en el siglo XVIII–. El grupo se completaba con varios «expertos», es decir, personas de avanzada edad, buenos conocedores del terreno a deslindar.

Esta ardua tarea podía resultar agotadora ya que suponía recorrer todas aquellas poblaciones de la contribución de Alicante colindantes con otros términos generales. En el caso de Alicante esto suponía casi un centenar de kilómetros cuando se delimitaba sólo la circunferencia externa del término general –y prácticamente el doble en el apeo del siglo XVIII, cuando se señaló también la circunferencia del término particular–. El trayecto se efectuaba a pie «hasta aventurarse la propia salud, en repetidas ocasiones, a su quebranto, ya por exceso en el trabajo y transtorno de las horas acostumbradas, ya también por los riesgos que ocurrían a cada paso en el reconocimiento y visita de las mojoneras por parajes escarpados y peligrosos»¹², como se lamentaba uno de los comisarios, y padeciendo los rigores del tiempo que, en ocasiones, les obligaba a suspender temporalmente las actuaciones.

El trabajo, ya de por sí difícil, se hacía todavía más al pretender que –cosa harto improbable–, «ninguna de las partes recibiese agravio, molestia ni vexación». Resultaba excesivamente complicado dar satisfacción a los dos contendientes cuando lo que se otorgaba a uno debía ser, necesariamente, en detrimento del otro.

Lo normal es que simplemente se pretendiera restaurar la línea a su sitio originario devolviendo a los respectivos municipios las tierras que, con el tiempo, hubieran sido usurpadas. Pero, en ocasiones, se aprovechaba la realización de un acto tan singular para intentar resarcirse de los perjuicios de un deslinde anterior. Así Alicante consiguió, en el de 1772-75, recuperar parte del territorio que fue adjudicado a Villafraqueza tras su fundación, ciento setenta años antes.

Conviene destacar que se han documentado cuatro amojonamientos del término general de Alicante durante la Edad Moderna: los de 1568-71, 1659-61, 1757-58 –que sin llegar a su fin hubo de revocarse– y el de 1772-75. En rigor, deberíamos hablar de tres amojonamientos conocidos y cuatro líneas divisorias, ya que, a excepción del último, no se conocen las actas o sentencias de los anteriores: las diligencias en su conjunto debieron desaparecer en el incendio que sufrió el Archivo Municipal de Alicante en 1691 y, por lo tanto, no se dispone del resultado de las actuaciones. Por este motivo, la referencia con la que contamos no es la sentencia pronunciada en el apeo sino, más bien, la situación de la que se partía al comenzar el siguiente.

Y decimos que se conocen tres amojonamientos y cuatro líneas divisorias porque de la más antigua contamos con referencias muy parcas¹³ y no tenemos conoci-

12. AMA., Arm. 14, Libro 16: *Reales provisiones y órdenes del Consejo sobre amojonamiento de Alicante con las representaciones y autos de los jueces de la Comisión*, 1775, fol. 173v.

13. Con relación a esta línea divisoria, queremos destacar alguna discrepancia respecto a un croquis en el que se plasma el contorno de la misma y que, según el autor, rodearía las poblaciones de: Alicante –en su límite con Villajoyosa–, Aguas, Busot, Agost, Petrel, Novelda y Aspe (DEL ESTAL, J.M.: *Alicante de villa a ciudad*, pág. 205). Aparte de que, por amojonamientos posteriores, hoy se pueden ubicar

miento exacto de cuándo se efectuó. El hecho de aparecer inserta en un documento de 1296, del cual tenemos conocimiento a través de sucesivos traslados notariales, hace pensar que pudiera estar datada en dicho año¹⁴; sin embargo, el empleo de un topónimo de los mencionados en la línea, nos plantea la sospecha de que pudiera corresponder a un momento posterior.¹⁵

Para la ubicación de las señales se partía del principio de que un mojón debía actuar como punto claro de división, fácilmente visible por quienes transitaban por el paraje y que, en la medida de lo posible, dificultase su traslado a otro lugar por parte de individuos presuntamente interesados en su desplazamiento. En este sentido, y por cuestiones de operatividad, los accidentes geográficos eran el elemento separador por excelencia. Por ello, es frecuente encontrarnos con que el límite aparecía fijado por un río, un barranco, una loma, el alto de una sierra o, incluso, una roca de características poco comunes. En cualquier caso, y aunque hubiera de construirse artificialmente, debía hacerse sobre un lugar que presentara alguna relevancia ya que, de otro modo, resultaría muy difícil poder reconstruir la línea en un momento posterior.

Esta circunstancia explica la gran disparidad existente en el número de mojones de uno u otro término, independientemente de las dimensiones de los mismos. La divisoria entre Busot y Jijona estaba recorrida, prácticamente en su totalidad, por el barranco del Salat y la rambla de Busot, de tal modo que, a lo largo de dicho trayecto, no fue necesario ubicar ninguna fita; igual sucedía entre Monforte y el tramo suroeste de su límite con Novelda, que aparecía dividido por el curso del río Vinalopó; en el caso de Agost, la zona colindante con Alicante, de unos veinte kilómetros de longitud, sólo fue marcada por nueve mojones: la mayor parte de la línea estaba cubierta por el barranco de la Pina y rambla del Pepiol al este y por la rambla del Alabastre al sur; también fue tenido en cuenta este elemento a la hora de deslindar San Vicente, ya en el siglo XIX, de tal forma que toda la parte oeste de la población está recorrida por la rambla del Rambuchar, que no contempla ni un solo mojón en más de diez kilóme-

bastante razonablemente los mojones situados en la parte oeste de la línea divisoria, ateniéndonos estrictamente a la descripción del documento, nos encontramos con un mojón triffinio situado en «Aljagar Ramblajugo a do se ajuntan los ríos de Aspe y de Novelda y de Monforte ay se ajuntan los términos...». Si el punto figura entre las tres poblaciones quedarían excluidas del perímetro las villas de Novelda y Aspe. La línea, por tanto, discurriría desde la Sierra de la Almadraza –en el actual término de Petrel– y bajaría bordeando por el oeste a la población de Monforte.

14. Así queda recogido en: DEL ESTAL, J.M.: *Alicante de villa a ciudad*, Alicante, 1990, pág. 205 y AZUAR RUIZ, R.: «Ruptura y formación de un espacio feudal. Alicante-1296».
15. La duda surge a partir del objeto del documento en el que aparece insertada la línea divisoria: en él se dispone el establecimiento de un puesto de guarda entre los términos de Alicante y Jijona, junto al camino que une ambas poblaciones –entre el Cabezo y el Monnegre, según indica el texto– con el fin de evitar la inseguridad que sufrían los transeúntes. A continuación, en un párrafo separado y sin aparente unidad con el anterior, se señalan los lugares por los que discurren las lindes, entre los que se indica uno denominado *Los Guardos Viejos*, situado exactamente entre El Cabezo y el Monnegre. Podría interpretarse, por tanto, que dicho topónimo tomaría su nombre de la torre de guardia que se instaló en dicho lugar, y, de ser así, parece poco verosímil que apareciera ya recogido en el mismo documento, máxime si tenemos en cuenta el apelativo de *viejos* denotando cierta antigüedad; este mismo argumento fue utilizado por algunos testigos en un pleito por lindes mantenido entre Alicante y Jijona en 1588 (AMA. Arm. 3, legajo 3, fols. 79 y ss.). Así pues, cabría contemplar la posibilidad de que esta división de términos fuera un añadido posterior incorporado en alguno de los traslados notariales.

tros; Muchamiel aparecía separada, por su parte oeste, del término de la ciudad mediante la vereda de los Pescadores.

Sirvan estos ejemplos de botón de muestra de cómo los fenómenos geográficos, por su inamovilidad, fueron preferiblemente empleados, sobre todo en épocas históricas en que el desarrollo tecnológico alcanzado en materia topográfica resultaba todavía muy escaso.

POBLACIONES DEL TÉRMINO GENERAL DE ALICANTE

Como se ha indicado en páginas precedentes, una de las finalidades al afrontar el trabajo consistía en hacer un recorrido por todas las poblaciones que integraron el término general de Alicante durante la Edad Moderna, estudiando su grado de dependencia jurisdiccional con respecto a la ciudad. En el terreno práctico, se trataba de clarificar aspectos como a quién o a quienes correspondía administrar justicia; si los órganos de gobierno de estas localidades gozaban de competencias propias o eran, simplemente, delegados de los de Alicante; quién y cómo elegía a los oficiales municipales; si les estaba o no facultada la imposición de sisas u otros tributos; en qué grado pudieron beneficiarse de derechos como el de entrada de vinos o frutos en la ciudad; o con qué limitaciones pudieron disponer de los pastos y demás *amprius* existentes en sus municipios.

Alicante tenía jurisdicción sobre tres lugares de realengo —Muchamiel, San Juan/Benimagrell y Monforte— y otros cuatro de señorío —Agost, Aguas, Busot y Villafranca—.¹⁶

16. En la segunda mitad del siglo XVIII y primeros años del XIX se produjeron algunos intentos de creación de señoríos alfonsinos dentro del término de la ciudad: don Ignacio Pérez de Sarrió lo pretendió

Una aproximación a los lugares de realengo, nos muestra los casos de Muchamiel y San Juan/Benimagrell como localidades cuya trayectoria marchó de forma bastante pareja; ambos atravesaron serias peripecias durante todo el periodo estudiado, logrando a finales del siglo XVI unas atribuciones que les vinieron otorgadas por los respectivos privilegios de *universitat* —en 1580 y 1593 respectivamente—; sin embargo, factores como la emigración —que intentó suplir el vacío poblacional generado en otras zonas por la expulsión de los moriscos en 1609—, las sequías y malas cosechas, así como las epidemias hicieron descender su vecindario y les impidió responder a unas deudas crecientes. La consecuencia fue que debieron renunciar a sus logros anteriores, y unirse nuevamente a la ciudad en 1614.

Muchamiel aún tuvo fuerzas para dar un paso más y consiguió el título de villa real en 1628; pero no fue por mucho tiempo, pues tan sólo un cuarto de siglo después, la ciudad hubo de acogerla de nuevo, debido a la difícil situación que atravesaba:

«que ha alguns anys que per part de la vil·la de Muchamel se ha tractat ab esta ciutat de que la unís y agregàs a ella per trobar-se com se troba, axí per lo contagi que a patit com per les caresties y esterilitat dels anys, molt carregada y alcansada, de manera que no pot acudir a satisfer a sos crehedors, y que cada dia es va despoblant, y es considera que sinó se ampara esta ciutat de ella ha de venir a quedar del tot despoblada, lo que porà també resultar en desluhiment de esta ciutat y encara en dany de la comoditat de sos vehins; perçó que la major part dels de dita vil·la són llauradors y jornalers, y acudeixen a llaurar y cultivar les heretats de diis vehins de essa ciutat per estar com està en lo millor de la horta de aquella dita vil·la»¹⁷.

De esta situación de superioridad manifiesta se valió el cabildo alicantino para efectuar una mayor presión económica sobre los vecinos de dichas localidades, quienes, para salvar los duros momentos que padecían, no tuvieron otra alternativa que plegarse a las exigencias de los oficiales de la ciudad. Al mismo tiempo, esto le sirvió para garantizarse la inquebrantable adhesión de tales municipios, condonándoles parte de la deuda sólo mientras permanecieran agregados, ya que, en caso de alcanzar de nuevo la separación, deberían pagar, incluso, lo correspondiente a los años en que se hubiera mantenido la unión.

Sólo ante tales medidas coactivas se explica el espíritu que reinó en esas poblaciones durante los dos siglos siguientes: los ánimos segregacionistas de sus vecinos fueron una constante que reaparecería de manera recurrente en forma de sucesivos pleitos. En los diversos procesos que se dirimieron, cualquiera que fuera su móvil, siempre subyacía la misma demanda: poder independizarse del yugo de la ciudad sin tener que hacer frente a las cargas económicas que a cambio les exigía en virtud de las concordias de agregación. El propio desgaste de la ciudad en estos conflictos y los logros que paulatinamente fueron obteniendo aquellas localidades pudieron finalmen-

para sus tierras situadas en la partida de El Campello; don Pedro Burgunyo y Juan, para sus posesiones en la Vallonga y Las Atalayas; y, en una inusitada interpretación del fuero alfonsino, también lo solicitó don Miguel de Lacy para quince viviendas de su propiedad, que ocupaban sendos inquilinos en el Arrabal Roig. Sin embargo, ninguno de ellos logró el respaldo del Consejo de Castilla en sus pretensiones.

17. AHN., *Consejos*, Legajo 22.331, Pieza 3ª, fols. 4-13.

te solventar la cuestión a favor de éstas, pero, por entonces, ya corrían los últimos años del siglo XVIII.

En lo concerniente al territorio vale la pena detenernos brevemente en el caso de Muchamiel por las singularidades que presenta. Cuando solicitó al monarca el privilegio de universidad ya incluía una propuesta de término que resultaba totalmente desmesurada: por el oeste iba desde la sierra del Ventós hacia el sur tomando longitudinalmente la mitad del actual territorio de San Vicente del Raspeig, rodeando lo que luego sería Villafranqueza y, sin entrar en Santa Faz, llegaba hasta el mar bordeando San Juan. Por la parte norte iba tomando los límites del término general de Alicante, esto es, con Tibi, Jijona, Relleu, Orcheta y Villajoyosa. No sabemos a ciencia cierta cual fue el territorio finalmente asignado, pero es evidente que no debió ajustarse a su petición que suponía, prácticamente, la mitad de la general contribución de Alicante y la inclusión, en dicho territorio, de los lugares de Aguas y Busot, ambos de señorío.

De igual modo, cuando el síndico de Muchamiel solicitó al rey la concesión de la categoría de villa, definía unos límites similares a los ya indicados, con la sola excepción de San Juan que ahora quedaba fuera de la línea propuesta. En esta ocasión, sí conocemos el resultado de las actuaciones, según una sentencia de 30 de abril de 1629¹⁸ y, aunque lejos de aceptarse la divisoria propuesta, que hubiera resultado altamente lesiva para los intereses de la ciudad, sí se otorgó, sin embargo, un territorio bastante más amplio que el mantenido en la actualidad, ya que incorporaba toda la zona denominada El Monnegre, situada al norte de su término –en los límites con Jijona– y, hoy en día, perteneciente a Alicante.

Posteriormente, el deslinde realizado en 1775 supuso para Muchamiel la pérdida de dicha partida. La ciudad parecía desconocer la sentencia de 1629 y aunque Muchamiel insistía en la inclusión de esa zona, la realidad fue que el documento, incesantemente buscado por el síndico de la villa en el Archivo del Real Palacio de Valencia, llegó ya demasiado tarde y el juez instructor se negó a admitirlo como prueba. Esta actitud, un tanto sesgada, del comisario del apeo privó para siempre al municipio de Muchamiel de un extenso territorio que muy bien podríamos cifrar en la tercera parte del que poseía hasta entonces.

Monforte, también población realenga, nos muestra una evolución histórica muy diferente a las anteriores; quizá el rasgo más característico sea su indefinición jurisdiccional. Habiendo disfrutado del *status* de villa en el siglo XIV, no se resignó nunca a ser reducida a aldea de Alicante como lo dispuso la sentencia de 5 de octubre de 1366. Hizo gala de una enorme perseverancia intentando mantener para sí unas atribuciones que nunca pudo justificar claramente. Sólo se ha podido localizar un privilegio de insaculación otorgado por Fernando el Católico en 1493:

«que lo regiment del dit lloch se comparteixca per los vehins e habitants de aquell per sorts axí com se fa en la ciutat de Alacant, que no stiguen los officis tots temps en unes persones y los altres sien perjudicats, ordenen que sia feta insaculació de totes les perso-

18. TORRES FAUS, F.: *Les divisions administratives històriques i l'ordenació del territori del País Valencià*, tesis doctoral inédita, defendida en la Facultad de Geografía e Historia de Valencia, en julio de 1996, III, págs. 1.715-1.718. (Agradezco al autor la deferencia de haberme remitido la transcripción de dicho documento).

nes que anaran en una ceda fermada de mà de sa spectable senyoria y dels dits justícia e jurats, closa e sagellada»¹⁹.

Esto hace pensar que, tal vez, en los ciento treinta años transcurridos entre su reducción a aldea en 1366 y el privilegio de insaculación de 1493, Monforte fuera erigida en *universitat*. O quizás, y ésta es la opción que consideramos más probable, que manteniendo el rango de aldea gozara, sin embargo, de algún grado de jurisdicción en lo civil. Así se desprende de una carta de 7 de febrero de 1585 dirigida por la Real Audiencia de Valencia a los justicia y jurados del «lloch eo universitat de Monfort». Al parecer, el síndico de la ciudad de Alicante se quejaba de que dicho año el lugarteniente de justicia elegido en Monforte no había prestado juramento ante el baile de Alicante, como era costumbre:

«E que avent-se seguit que vos dit justícia haveu deixat de accedir a dita Alacant y prestar lo jurament en poder de dit batle general com a llochtinent de justícia en lo criminal de dita ciutat, hi lo hajau prestat en poder del subrogat de batle que està en aqueix lloch, sens haver anat a casa del dit justícia en lo criminal de dita Alacant a regonexeli la superioritat que aquell té en vos, en respecte de les causes criminals, en grau perjuí de la dita ciutat y contra la dita immemorial posessió en que aquella està de dites coses»²⁰.

Por ello, la ciudad solicitaba a la Real Audiencia reprendiera dicha actitud. Se deduce, pues, que Monforte tenía una competencia reducida a los pleitos civiles aunque desconocemos si con algún tipo de limitación; Bendicho en su crónica de mediados del siglo XVII indicaba: «es aqueste pueblo universidad, pero con limitada jurisdicción, pues no tiene en caso de crimen, y assí la justicia sólo conoce en suma de 50 sueldos»; ²¹ y si éste fue su nivel de competencias en la realidad, técnicamente no debería denominarse *universitat*, categoría que llevaba implícita la posesión de la jurisdicción baja criminal.²²

En la centuria siguiente no se reflejan fuertes tensiones entre la ciudad y el lugar de Monforte; parece más bien que éste fue intentando acaparar, poco a poco, nuevas parcelas de poder: se intitulaba *universidad*, según se apreciaba, al menos, en los libros de cuentas encontrados en el Archivo Municipal de Monforte del Cid; ²³ en 1629 se llevó a cabo el nombramiento de un síndico para actuar en «los negocios que emprenden la corporación» ²⁴; en 1638 el Capitán General del reino de Valencia hubo de enviar una comunicación recordando la obligatoria asistencia del baile en la extracción de oficiales para el gobierno de dicha universidad ²⁵; en 1646 se elevó un proceso por el cabildo de Monforte contra el de Alicante, sobre lo que consideraba eran intromisiones jurisdiccionales.²⁶

19. AHN., *Consejos*, Legajo 22.071, fols. 182v. y ss.

20. AMA., Arm. 14, Libro 22: *Primera copia original ... de Monforte*, fols. 212-214v.

21. BENDICHO, V.: *Crónica de la muy ilustre, noble y leal ciudad de Alicante*, Alicante, manuscrito de 1640 (ed. facsímil: Alicante, 1991), pág. 359.

22. BERNABÉ GIL, D.: «Universidades y Villas...», págs. 16-17.

23. A(rchivo) M(unicipal) M(onforte) C(id), *Cuentas*, Legajos 1-5: *Libro de cuentas y de la compra del pan que hace el consejo de la universidad de Monforte, hecha entre los vecinos y habitantes de dicha universidad*. Años 1584-1676.

24. AMMC., Documentos s. XVII, Ápocas, Legajo 1, 1.020/20.

25. AMMC., Documentos s. XVII, Ápocas, Legajo 1, 1.020/34.

26. AMMC., Documentos s. XVII, Ápocas, 1.020/47.

La ciudad no parecía conceder demasiada importancia a estos escarceos de Monforte, de tal manera que, cuando en el siglo siguiente, quiso retomar las riendas, ya resultó demasiado tarde: Monforte pudo alegar que sus logros estaban refrendados por la costumbre. Por nuestra parte mantenemos que únicamente la vía consuetudinaria le hizo consolidar algunos derechos que de manera irregular fue arrebatando a la ciudad durante la Edad Moderna. Y, en efecto, con cierto éxito ya que así le sería reconocido por la Real Audiencia cuando, en el primer cuarto del siglo XVIII, afirmaba que «el lugar de Monforte siempre y en todos tiempos ha tenido la jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio que ha ejercido en diferentes actos civiles y criminales hasta el año 1715».²⁷ Justo es destacar, también, que en este caso obró a favor de Monforte el enfrentamiento mantenido entre las autoridades de Alicante y los ministros de la Real Audiencia que se sentían desobedecidos y menospreciados por el entonces alcalde de la ciudad Francisco Esteban Zamora.

En cuanto a las poblaciones de señorío, existía una fragmentación jurisdiccional que superponía los diferentes niveles de la justicia. Un señor podía mantener en su territorio la jurisdicción *alfonsina* aunque la suprema correspondiera al justicia de la ciudad; esto pudo crear una cierta ambivalencia en los propios vecinos del lugar, que lo eran de su municipio en unos aspectos, pero que, al mismo tiempo, se mantenían vinculados a la ciudad en otros. Así ocurrió en Agost y Busot y ello les valió no pocos enfrentamientos con las autoridades alicantinas.

En general, los señores siempre intentaron ampliar sus prerrogativas: si la jurisdicción *alfonsina* les permitía solamente el conocimiento de las causas civiles y las pertenecientes a la baja criminal, ellos pretendieron entrar también en otras de mayor grado. A su vez, la ciudad trató de limitar, en la medida en que le fue posible, no sólo los excesos pretendidos por los señores, sino también los derechos que aquellos tenían legítimamente adquiridos. Así, veremos a los titulares de señoríos pleiteando por las continuas intromisiones jurisdiccionales del justicia de Alicante, o por los impedimentos de la ciudad a la introducción de frutos o vinos en ella, o por la cuestión de los pastos y otros *amprius*.

El señorío de Agost es el más antiguo de los estudiados en este trabajo: en 1296 fue donado por el rey Jaime II a Ramón d'Urg; adquirido en fecha no determinada por Ferrer Descortell, a cuya familia y lugar puso Jaime II bajo su protección en 1319 para que no resultara perjudicado en un pleito que mantuvo con la villa de Alicante²⁸; pasó sucesivamente, a don Jaime Burgunyo, a la familia Vallebrera y, ya a comienzos del siglo XVII, a don Francisco Rocamora Ruiz.

Ni en las escrituras de venta ni en la carta de población se hace mención expresa al tipo de jurisdicción que gozaba el señor de Agost. Es probable que tras la aprobación del fuero de Alfonso II de Valencia (IV de Aragón) obtuviera la jurisdicción en él contemplada; sin embargo, no aparece de forma explícita hasta 1582 cuando una sentencia dejaba constancia de que el titular del señorío gozaba de la jurisdicción *alfonsina* y que, por ello, era competente en las cuestiones contempladas por el fuero de

27. AHN., *Consejos*, Legajo 22.071, Pieza nº 4, s/f.

28. FERRER MALLOL, M^a T.: *Les aljames sarraïnes de la Governació d'Oriola en el segle XIV*, Barcelona, 1988, págs. 13-14.

1329 y la jurisprudencia posterior. Pese a todo, la ciudad se negó sistemáticamente a reconocer al dueño de Agost competencias jurisdiccionales que él pretendía, por lo que durante los siglos XVI, XVII y XVIII, se enfrentaron en pleitos sobre diversos aspectos: nombramiento de órganos de gobierno, pastos, insignias de mando, preeminencias, etc.; asuntos éstos en los que el señor de Agost veía la injerencia de las autoridades ciudadanas en sus prerrogativas.

En unas ocasiones, el argumento esgrimido por los oficiales de Alicante fue el antiguo privilegio de Alfonso X, por el que se entendía que todos los lugares de su general contribución estaban subordinados a la ciudad, queriendo olvidar el fuero alfonsino en favor del señorío:

*«Y porque según la resultante del real privilegio de la primitiva población de cristianos de esta dicha ciudad, concedido por el señor Rey D. Alphonso de Castilla en el año de mil ducientos y noventa, presentado en autos y colocado en los principales, se le constituye, entre otras, por su término el dicho lugar de Agost; y semejante real privilegio expresa provada y verdad notoria, que no puede infringirse sino con otro igual privilegio de dismembración o separación concedido por otro señor rey, de cuya soberanía es privativa la suprema regalía de unir y separar territorios; y hasta aora no ha presentado dicho lugar de Agost alguno que acredite su pretendida separación por erección en universidad o villa, o en otra forma cuerpo de por sí».*²⁹

En otros casos, fue simplemente la interpretación que cada una de las partes hacía de la letra del propio fuero: por ejemplo, frente a un delito de heridas por pedrada: ¿qué tribunal era competente? Aunque en principio parecía inscribirse en la baja criminal y, por ende, corresponder a la jurisdicción alfonsina, ambos magistrados —el de la ciudad y el del señor— pretendían su legitimidad para entender en este tipo de causas. Ante la sentencia dictada por el justicia de Agost, el alcalde mayor de Alicante no sólo se apresuró a revocarla sino que, además, se personó en la *universitat* acompañado de sus oficiales y «tropa militar», determinando el encarcelamiento del alcalde, teniente y escribano de Agost, aduciendo no haberle sido comunicadas las actuaciones seguidas en el hecho. Un auto de 15 de diciembre de 1742 aceptaba que el «dicho alcalde mayor de Alicante deve conozer de dichos autos».³⁰

El elevado número de conflictos planteados en torno a los supuestos abusos jurisdiccionales de la ciudad se explica, en realidad, por lo complicado que resultaba establecer qué tipo de delitos pertenecían a la jurisdicción criminal baja, y, aún más, no parece que estuviera del todo claro en la época si el fuero de Alfonso II reconocía siquiera la jurisdicción criminal baja. Aunque de forma errónea, la asociación entre jurisdicción alfonsina y mixto imperio abocaba a su identificación con la jurisdicción civil excluyendo, por tanto, las competencias pertenecientes a la baja criminal. Pla Alberola mantiene que esta interpretación equivocada sería fuente de conflictos a lo largo de toda la Edad Moderna, acabando por imponerse, finalmente, durante el siglo XVIII.³¹

29. AMA., Arm. 14, Libro 15: *Primera copia original del apeo y deslinde del término de esta Ilustre ciudad con el de la universidad de Agost*, 1773, fols. 8v-9.

30. AMA., Arm. 1, Libro 31, fols. 509 y ss.

31. PLA ALBEROLA, P.J.: «La jurisdicción alfonsina como aliciente para la recolonización del territorio», en *Revista de Historia Moderna*, nº 12, Alicante, 1993, pág. 81.

El territorio de Agost también merece algún comentario en lo relativo a su divisoria con la población de Petrel, si bien en este caso, junto a Agost, estaba implicada la ciudad de Alicante, ya que, en definitiva, se trataba de la frontera de su término general. En las dos primeras divisorias que tenemos documentadas para la general contribución de Alicante, se nos muestra dentro del territorio de Agost una amplia zona que hoy en día corresponde al municipio de Petrel.

Según consta en el apeo efectuado en el siglo XVIII, después de la expulsión de los moriscos, Felipe III pidió a don Antonio Coloma y Calvillo, señor de Petrel, la repoblación con cristianos viejos de una serie de haciendas que habían sido abandonadas por los moriscos, haciéndole merced de todas estas tierras:

*«por haver coadyuvado a la expulsión de los moriscos de España al señor de la villa, mi parte, le hizo gracia el rey de las tierras que éstos poseían en ella (...). Y últimamente [el 27 de octubre de 1612] que les hizo gracia a los vecinos de la villa de toda la sierra del Cit [inicialmente reservada al señor] con tal que hubieran 1.000 cabezas de ganado, y después de dichas gracias, hizo mi parte boalares de toda la enunciada sierra».*³²

Posteriormente, el 25 de febrero de 1662, fue admitida una firma de derecho a favor de los dueños de Petrel, por la cual se establecía la situación de los nuevos mojones que ampliaban su territorio en la linde con Agost. La ciudad de Alicante pidió la revocación y solicitaba se estuviera al resultado del amojonamiento general que entonces llevaba a cabo la ciudad con todos los lugares confinantes.³³ No hay constancia, sin embargo, de que así se hiciera. Pero, cuando un siglo más tarde, don Bernardo Osoz y Larrahinzar, juez comisionado del apeo y deslinde de la ciudad en 1759, procedió a amojonar la divisoria entre Petrel y Alicante, tomando claramente partido a favor de ésta última, volvió a situar la divisoria aproximadamente en los puntos en que se encontraban antes de la expulsión de los moriscos, ello a pesar de la consiguiente queja del conde de Puñoenrrostro, dueño de Petrel, que se lamentaba de haber perdido más de una legua de largo y otra de ancho de su término —unos 25 kilómetros cuadrados—. Y más grave aún, si tenemos en cuenta que en dichas tierras estaba situado el boalar de la villa, dificultándose la obtención de pastos para el abastecedor de la carne, «de manera que no hay quien tome el abasto de las carnes». También se hacía eco de la tala masiva de árboles que se estaba llevando a cabo, fundamentalmente por vecinos de Agost.³⁴

Así pues, y ante la acusación vertida sobre Osoz de «haverse hecho una línea arbitraria y del todo irregular y diforme», la Real Audiencia declaraba en junio de 1759 haber lugar al recurso planteado por el señor de Petrel, dando por nulos y sin ningún efecto los autos y diligencias de dicho comisario, al tiempo que ordenaba demoler los mojones que habían sido levantados. Por fin, en agosto de 1775 se dictaba sentencia definitiva en el pleito de apeo entre Alicante y Petrel, indicándose:

«Que la ilustre ciudad no ha provado su acción y demanda como provarlo convino. Declárola por no provada, y que la villa de Petrel y señor territorial lo han executado en

32. AMA., Arm. 14, Libro 24: *Primera copia original del apeo y deslinde del término de esta Ilustre ciudad con el de Petrel*, 1775, fol. 81.

33. AMA., Arm. 3, Legajo 7, Pieza 7: *El dueño de Elda y Petrel con el síndico de Alicante, sobre términos*.

34. AMA., Arm. 1, Libro 40, fol. 143.

sus defensas y pretenciones, en cuja conformidad asimismo lo declaro. Y administrando justicia debo mantener y amparar como mantengo y amparo a la mencionada villa y su Excmo. conde, en la posesión inmemorial diuturna e imbeterada, real, corporal vel quasi en que están y han estado del término litigioso, en virtud del título que induze la firma de derecho que pretendió y logró en el año pasado de 1662 el señor Juan Andrés Coloma, conde de Elda y dueño de la citada villa».³⁵

A continuación, el juez mandaba reponer los mojones en el mismo lugar en que fueran designados tras la firma de derecho.

La población de Busot fue objeto también de conflictos similares debido a que sus límites con Jijona lo eran, a su vez, de la general contribución de Alicante. Los territorios colindantes entre Alicante/Busot y Jijona fueron muy discutidos durante toda la Edad Moderna, según podemos extraer de la documentación encontrada.

Ya en 1576, el síndico de Alicante y el señor de Busot presentaron un pedimento ante la Real Audiencia de Valencia asegurando que la Hoya del Cabezó y la Cañada del Vergeret estaban situadas dentro del término general de Alicante y particular de Busot, a cuyos dueños contribuían, desde tiempo inmemorial, con la partición de frutos.³⁶

Al parecer, algunos vecinos de Jijona, con tierras en dichas partidas, habían «querido molestar y perturbar a la ciudad y al dueño de Busot la quieta, pacífica e inmemorial posesión...» y clandestinamente habían extraído en garva las mieses cogidas en dichas tierras, sin pagar el diezmo correspondiente al obispo de Orihuela.³⁷

En 1588 documentamos otro pleito entre Alicante y Jijona, en el que inicialmente se trataba sólo de rectificar la ubicación del mojón que debía estar situado en el lugar más alto de la sierra del Cabezó. Don Diego Covarrubias, relator de la causa, estableció que había de ubicarse en la atalaya de la Sebina, punto en el que quedaban

35. AMA., Arm. 14, Libro 24: *Primera copia original del apeo de esta llustre ciudad con el de Petrel*, fol. 858.

36. AMA., Arm. 3, Legajo 1, Pieza 2: *La ciudad de Alicante y el lugar de Busot con la ciudad de Jijona sobre percepción de frutos*.

37. Debe tenerse en cuenta que, también a nivel eclesiástico, se trataba de una zona linderera, en la que los diezmos de Busot pertenecían al obispado de Orihuela, y los de Jijona al arzobispado de Valencia.

divididos ambos términos generales.³⁸ Pero el asunto se fue complicando poco a poco –las diligencias del mismo se apilan en un volumen que supera los 450 folios–. Hubo que empezar determinando la ubicación precisa de algunos topónimos que, cada una de las partes, radicaba en sitio distinto. Por ejemplo, cuál era exactamente la Peña Foradada que habría de tomarse como mojón. A la sazón, había tres y, según las partes, se hacía referencia a la que más conviniera. Igual ocurrió con la señal de Les Guardes Velles, que para Jijona era la situada en el Molinell y no en Aljubet, como mantenía Alicante.

En 1591 surgieron nuevas desavenencias y Covarrubias tuvo que encargar otra visura de los términos, para lo que debieron designarse expertos y, como parte neutral o «tercero», se nombró a un catedrático de matemáticas de la Universidad de Valencia. Se recorrieron todos los puntos de la línea divisoria entre Alicante y Jijona y la confusión alcanzó tal grado que, en 1598, en un «rizar el rizo», Alicante presentó una nueva petición por la que indicaba deberían tomarse como límites entre ambos términos generales los que figuraban en la escritura de venta de Busot, de 1423:

*«el castillo de Busot, sito dentro de los términos generales de Alicante, (...) lindava con los términos de Alicante, de Xixona, de la Torre de las Mansanas, de Relleu, de Cabrafich y Aguas, y que estaban en término de Alicante, Cabrafich y Aguas».*³⁹

De tal modo, que el término de Busot y, por tanto, la contribución de Alicante debería discurrir según dicha propuesta por la línea que iba a lo largo de la sierra de la Grana, «quedando las vertientes de la solana de esta sierra por término de Alicante y Busot; por lo que el término general de Alicante, según esta afrontación, se extendía mucho más adentro, así a Xixona, que sería unos tres quartos de legua...».⁴⁰

Es fácil imaginar la reacción de Jijona, que pidió pasase el asunto al Supremo Consejo de Aragón, y todavía en 1625 seguía el caso pendiente. Hasta 1674 no quedó resuelta la cuestión acerca del terreno litigioso: la Real Audiencia de Valencia publicaba una sentencia por la cual se otorgaba la jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio de todas las sierras y territorio en conflicto a favor de la justicia de Jijona, aunque ello no supuso el fin de las disputas por nuevos incumplimientos.⁴¹ Los parajes en cuestión eran la Cañada de la Alquedra, la Cañada del Almer, la Cañada del Espino, la Cañada del Cabezón y la partida de la Rambla⁴². Y cuando, en 1773, se ordenó el amojonamiento de todas las poblaciones que componían el término general de Alicante, todavía se siguieron planteando los mismos problemas a la hora de reconocer los topónimos que actuaban como divisorios.

Sin embargo, estos choques en los que Alicante y Busot aparecieron aliados contra Jijona, no deben hacernos perder de vista las colisiones entre el propio señor de Busot y la ciudad cabecera, bien por no aceptar ésta determinadas competencias del dueño del lugar, bien por la pertenencia de algunas tierras linderas entre ambas poblaciones como la sierra de la Bonalba o la cañada del Vergeret.

38. AMA., Arm. 3, Legajo 1, Pieza 3.

39. AMA., *Ibidem*, fol. 353.

40. AMA., *Ibidem*, fol. 350.

41. AMA., Arm. 11, Libro 52, fols. 404-406.

42. AMA., Arm. 1, Libro 27, fols. 431 y ss.

El caso de Villafranqueza cobró unos tintes muy particulares dentro de la general contribución de Alicante. Inicialmente, gracias a la singular figura de su fundador, consiguió determinadas prebendas poco probables de no haberse tratado del secretario de estado⁴³: el reconocimiento de un término muy por encima de lo que le correspondía realmente, la erección de una iglesia parroquial independiente de la de San Nicolás pocos años después de constituido el señorío –pese al escaso número de vecinos con que todavía contaba– y, finalmente, el logro de la jurisdicción baronal o suprema que alcanzó don Pedro de Franqueza, lo que le permitió ejercer unas competencias casi equiparables a las de la propia ciudad. Todo esto produjo cierto resque-
mor entre las autoridades ciudadanas que no vieron con buenos ojos la existencia de un señorío de tal relevancia «situado a las puertas de la ciudad». Alicante, en un primer momento, hubo de resignarse ante el peso específico de Franqueza en la esfera político-social, pero mantendría las espadas en alto esperando mejor ocasión para desquitarse de los agravios sufridos.

La fundación del lugar debió tener como finalidad, no sólo la adquisición de la jurisdicción alfonsina, sino que posiblemente respondiera, también, a un interés de tipo económico al comprar las tierras en una zona que se vería positivamente afectada por las aguas del pantano de Tibi⁴⁴, pudiendo tratarse, por tanto, de un excelente negocio el anticiparse a la revalorización de un suelo que, con la puesta en marcha del embalse, sería de buen regadío y serviría de aliciente a los futuros colonos.

Se han encontrado diversos planos⁴⁵, fechados en 1590 y firmados por Cristóbal Antonelli, en los que aparece la proyección del nuevo lugar al que se daría el nombre de Santa Magdalena. Entre estos bosquejos, efectuados por uno de los responsables de la ejecución de la presa, existe alguno que contempla la situación de las distintas parcelas adquiridas, la fuente y balsa de Orgegia e, incluso, la repercusión que sobre tales terrenos tendrían las nuevas aguas del pantano; todo ello contribuye a afianzar la hipótesis de una vinculación entre la realización de dicha obra y la adquisición de tierras por parte del todopoderoso Franqueza, seguramente haciendo uso de su información privilegiada.

En efecto, a partir de 1595 comenzaron a establecerse los veintinueve colonos que poblaron el territorio de Franqueza, rebasándose con mucho el número exigido por el fuero alfonsino. Tres años más tarde, una sentencia de la Real Audiencia le reconocía el ejercicio de la jurisdicción alfonsina y, poco después, otra le facultaba para levantar los mojones que dieran límite a su término. De acuerdo con ello, en 1601, don Antonio Mingot actuaba en calidad de comisario en el amojonamiento del nuevo municipio.⁴⁶

43. JUDERÍAS, J.: «Los favoritos de Felipe III. Don Pedro de Franqueza, conde de Villalonga. Secretario de Estado», en *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, noviembre-diciembre 1908, núms. 11-12, págs. 309-327 y ESCUDERO, J.A.: *Los Secretarios de Estado y del Despacho*, Madrid 1976, I, págs. 227-230 y III, págs. 792-818.

44. Aprovecho la ocasión para testimoniar mi agradecimiento al Excmo. Sr. D. Alfonso Merchante y Martínez de Pisón y a su esposa, actuales condes de Villafranqueza, quienes amablemente me permitieron una toma de contacto con la documentación que custodian en su archivo familiar.

45. Archivo del conde de Villafranqueza.

46. AMA., Arm. 14, Libro 12: *Primera copia original de los autos sobre apeo y deslinde del término de esta Ilustre ciudad con el de Villafranqueza*, 1773, fols. 161-234v.

Este deslinde fue claramente favorable al señorío ya que, entre otros excesos en que se incurrió, estuvo el de integrar en su demarcación diversas fincas realengas de particulares vecindados en Alicante y que, por tanto, pertenecían al término particular de la ciudad. Las alegaciones efectuadas por su representante a lo largo de toda la línea no fueron tomadas en consideración, limitándose a repetir en cada uno de los puntos «que no consent en la erecció del dit molló perquè, a més del que té dit, és contra el thenor de la real sentència». No sería hasta el último cuarto del siglo XVIII cuando Alicante quedara restituida de la parte de territorio de que fuera indebidamente despojada:

*«Devo declarar por no comprendidas en él [término de Villafranqueza] todas las tierras y poseciones que gozan y siempre gozaron de la calidad de realengas, estén en qualquiera parte cituadas, hasta incluhir en esta clase las que suenan inmediatas al pueblo; por manera que, aunque por la inescusable buelta y rodeo que se ha llevado en la mojonera significada, vengan a quedar materialmente encerradas e interclusas en el recinto del término de Villafranqueza, no por eso dexarán de corresponder formalmente al de esta ciudad y satisfacer en ella las cargas y repartos correspondientes».*⁴⁷

En cuanto a las cuestiones jurisdiccionales, hasta el siglo XVIII fueron escasos los conflictos entre el señorío y la ciudad, a diferencia de lo que ocurriera con otras poblaciones, como Busot y, sobre todo, Agost. Este hecho que, en principio puede parecer extraño, resulta explicable si tenemos en cuenta que la jurisdicción suprema —ejercida por el señor de Villafranqueza— eliminaba prácticamente cualquier prerrogativa de la ciudad, lo cual evitaba esa indefinición más propia de los señoríos alfonosinos.

Una vez concluida la Guerra de Sucesión, Alicante intentó valerse de la confusión reinante en esos primeros momentos y, tergiversando intencionadamente el contenido de una orden de 31 de agosto de 1709, quiso entender que quedaban bajo su jurisdicción todos los lugares —de señorío o de realengo— que se mantenían en su término general. Esto le facultó para realizar intromisiones jurisdiccionales en las distintas poblaciones que, en el caso de Villafranqueza, se materializaron en la prohibición de vender sus vinos en la ciudad, inmiscuirse en el nombramiento de sus cargos municipales o arrogarse causas que eran propias de la justicia de la villa.

Así las cosas, el representante de Villafranqueza dirigió su queja a la Real Audiencia, obteniendo de ella una provisión favorable. Por su parte, la ciudad no se avino fácilmente: esto podía suponer un ejemplo pernicioso para las otras poblaciones, por lo que elevó una consulta al Consejo de Castilla solicitando amparo en la jurisdicción civil y criminal que pretendía ejercer sobre Villafranqueza.⁴⁸ Aunque no hemos podido disponer de la resolución definitiva, sí sabemos que el asunto se prolongó durante varias décadas y, finalmente, todos los indicios apuntan a que Villafranqueza fue confirmada en sus competencias jurisdiccionales.⁴⁹

El lugar o partida de Aguas Altas, hoy Aguas de Busot, mantuvo un *status* diferente: su propietario territorial, el marqués del Bosch, nunca poseyó jurisdicción so-

47. AMA., Arm. 14, Libro 12: *Primera copia original... de Villafranqueza*, fol. 772.

48. AHN., *Consejos*, Legajo 22.071, Pieza nº 4.

49. AMA., Arm. 9, Libro 60, fols. 229-229v.

bre sus moradores, por lo que únicamente debe calificarse de señorío solariego. El lugar estuvo adscrito a la particular jurisdicción de la ciudad de Alicante y sólo sus oficiales tuvieron facultad para ejercer las tareas de justicia y gobierno hasta que se produjo su segregación municipal, ya a mediados del siglo XIX.

Los Baños situados en esta partida fueron también propiedad de la ciudad de Alicante hasta que, en 1816, una sentencia de la Real Audiencia otorgaba su titularidad a la marquesa del Bosch:

*«Se mantiene y ampara y, en caso necesario, se reintegra a la marquesa del Bosque, condesa de Torrellano, como administradora de los bienes y rentas de su marido, el huso, goce y posesión de disponer de las aguas de los baños de Busot, de su caserío, de las demás aguas, balsas y terrenos de dicho término cuya posesión no perturben la ciudad de Alicante, (...) sin que por esta providencia se le impida a la Junta de Sanidad hacer analizar las aguas quantas veces estime, conducentes en beneficio de la salud pública».*⁵⁰

No parece que se conformara sin más el ayuntamiento de la ciudad, que, pretextando abuso de precios y falta de calidad en los servicios, se dirigió al Consejo de Castilla reclamando la devolución de los mismos.⁵¹ No le fueron concedidos y así lo acredita el hecho de que resultaran inscritos por los marqueses del Bosch en el Registro de la Propiedad.⁵²

El proceso formal de egresión del lugar de Aguas comenzó ya en 1805, cuando un grupo de vecinos del mismo efectuó un pedimento al rey solicitando ser eximidos de la jurisdicción de Alicante:

*«así también, a proporción que van tomando aumento las poblaciones, hay necesidad de multiplicar los sugetos que administren justicia, así se experimenta en el día con respecto al expresado lugar de Aguas Altas, sugeto de inmemorial a la ciudad de Alicante, pues que haviéndose aumentado su población hasta el respetable número de ciento y cincuenta vecinos, son muchos y frecuentes los negocios que les ocurren con respecto a sus personas y haciendas, y como la mencionada ciudad de Alicante dista tres leguas de dicho lugar (...) resultan a primera vista las incomodidades que aquellos moradores han sufrido y sufren para la ventilación de sus negocios».*⁵³

Estas demandas se vieron respaldadas por los órganos legislativos del país, por cuanto el 23 de julio de 1835 aprobaban un real decreto provisional permitiendo la formación de municipio propio en aquellas poblaciones que rebasaran el número de 100 vecinos.

Al amparo de dicha disposición, en 1837⁵⁴ se iniciaron las diligencias de deslinde permaneciendo abiertas hasta el 21 de marzo de 1841 en que se establecían los límites de Aguas con la ciudad.⁵⁵ Momento éste que aprovecharon hábilmente los ofi-

50. A(rchivo) R(eino) V(alencia), *Bailía*, E, exp. 404, Apéndice, año 1816.

51. AMA., Arm. 9, Libro 22, s/f., cabildo de 26-6-1828.

52. CANDELA HIDALGO, A.R.: *La extinción del elemento solariego en los señoríos de jurisdicción alfonsina radicados en las comarcas del Campo de Alicante y Bajo Vinalopó*, Memoria de Licenciatura inédita, Alicante, 1992, pág. 488.

53. AMA., Arm. 7, caja 14: *Deslinde de Aguas* y AHN., *Consejos*, Legajo 23.111, Pieza 7.

54. A(rchivo) D(iputación) A(licante), *Cuentas de propios, arbitrios y presupuestos municipales de Aguas*, legajo 1. 2.146: Presupuesto para el año 1838.

55. AMA., Arm. 7, caja 14: *Deslinde de Aguas*.

ciales de Alicante para recuperar algunos enclaves de interés como eran los Baños, las fuentes que los abastecían y las partidas de Aguas Bajas y Barañes, todo ello según quedó reflejado en la propia acta.

El proceso segregacionista no había concluido: en esas mismas fechas —concretamente el 1 de noviembre de 1836—⁵⁶ San Vicente del Raspeig alcanzaba su egresión municipal, que culminaría siete años después con la fijación de su término particular. Y ya coronando el siglo —el 27 de febrero de 1899—⁵⁷ sería El Campello quien consiguiera formar ayuntamiento propio independiente de Alicante.

CONFLICTOS DE VECINDAD

Como se puede apreciar, la historia entre Alicante y las poblaciones de su general contribución está sembrada de enfrentamientos en defensa de unos intereses, generalmente contrapuestos, que afectaron a cuestiones de índole muy diversa. También nos ha parecido de interés mencionar las discrepancias habidas entre Alicante y las localidades de otros términos generales como Elche, Jijona o Petrel. Esas relaciones de vecindad se vieron empañadas en múltiples ocasiones por diversos conflictos de entre los cuales, por su reiteración, destacaremos tres: las aguas del río Monnegre, los aprovechamientos comunales y, por último, la comercialización del vino, asuntos éstos muy relevantes en la convivencia de estos pueblos y de sus gentes.

a) Se ha aludido al privilegio de Alfonso X que otorgaba a los pobladores de Alicante la pertenencia de las aguas naturales y pluviales que discurrían por el cauce del Monnegre, quedando vedado su uso a las poblaciones situadas en el curso alto del río —Onil, Castalla, Ibi, Tibi y Jijona— cuyos habitantes padecían el perjuicio de haber sido despojados de aquellas fuentes que alimentaban el cauce del río y cuyas aguas, pese a estar situadas en sus términos, veían pasar de largo.

En este sentido, Viravens nos ofrece noticias de enfrentamientos ya a finales del siglo XIV⁵⁸, que periódicamente volvían a suscitarse y que fueron motivo de largos pleitos sobre todo con Jijona. Los campesinos con tierras en las márgenes del río levantaban presas para retener las aguas y poder regar sus fincas, mas cuando estos casos llegaban a instancias judiciales, normalmente quedaban sentenciados a favor de la ciudad en virtud de su antiguo privilegio y el juez mandaba demoler los azudes construidos.

Se tiene constancia, también, de algunas obras realizadas por el cabildo alicantino en la sierra de Jijona para sacar a la luz nuevas aguas⁵⁹, aduciendo en su favor la inmemorial posesión en que estaban de disponer de todas las «alumbradas y por alumbrar». Ni que decir tiene que el ayuntamiento de Jijona utilizó todos los argumentos posibles para impedir estas obras de captación, pero lo cierto es que, tras diversas vicisitudes, se llevaron a cabo, aunque desconocemos si con algún éxito que permitiera atenuar la sed de los campos alicantinos.

56. ADA., *Cuentas de propios, arbitrios y presupuestos municipales de San Vicente*, Legajo 2.343, Presupuesto para el año 1837.

57. Instituto Geográfico y Estadístico. *Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones comunes a los términos de Campello con Alicante*, 1910.

58. VIRAVENS PASTOR, R.: *Crónica de la muy ilustre y siempre fiel ciudad de Alicante*, Alicante, 1876, (ed. facsímil, Alicante, 1989), págs. 134 y ss.

59. AMA., Arm. 3, Legajo 6, piezas 30, 32 y 33 (1661).

Cuando en 1697 tuvo lugar la rotura de la presa de Tibi, la situación para la huerta alicantina se hizo todavía más complicada, al dificultarse el mantenimiento de las zonas que habían sido puestas en regadío contando con las aguas de dicho pantano. Los testimonios aparecidos en documentos de la época resultan verdaderamente patéticos: cada año eran más reducidas las cosechas de vid, lo que estaba provocando la ruina no sólo a los modestos labradores sino también a las casas importantes; tampoco se podían utilizar los molinos del término por la falta de agua, lo que obligaba a llevar la molienda a los colindantes y, como consecuencia de ello, a incrementar el precio del pan; también el agua de beber estaba causando graves epidemias al corromperse por el calor.⁶⁰

Este lamentable panorama todavía se deterioró más cuando, de nuevo, las poblaciones de cabecera del río volvieron a desviar las aguas para aprovechar parte de su caudal. Viravens recoge diversas sentencias de la Real Audiencia de Valencia por las que se ordenaba proceder a la destrucción de todas las obras efectuadas; periódicamente hubieron de realizarse tareas de inspección a lo largo del río, llevadas a cabo por oficiales de Alicante, en ocasiones con la protección de una escuadra de soldados y «otras gentes armadas», según relata el cronista.

b) También los pastos y otros bienes de aprovechamiento comunal fueron causa de confrontación. Éstos eran elementos de gran importancia para la subsistencia de las clases más bajas, porque con ellos tenían asegurado el alimento para los animales y la obtención de algunos recursos a través de la caza, el abasto de leña o la recogida de esparto y barrilla.

El tema de las hierbas estuvo siempre presente —directa o indirectamente— en cualquier conflicto territorial entre municipios linderos. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de Elche que solicitó en varias ocasiones el amojonamiento entre ambos términos argumentando siempre que las fitas anteriores habían sido arrancadas por vecinos de Alicante con la pretensión de usurpar sus tierras. Hacia 1737 el cabildo ilícitano se refería a que la pérdida de terreno que sufría era ya del orden de dos leguas de longitud y tres cuartos de latitud, y, justamente, en el área más fértil para el pasto lo que incidía en los ya elevados precios de la carne en dicha villa.

También con Jijona se libraron no pocas refriegas por esta causa, dando lugar, en ocasiones, a la incautación de las reses e incluso a la realización de *degüellas* —degollamiento de ganado—, sobre todo en el denominado «terreno litigioso» entre Busot y Jijona. Y no fue otra cosa lo que hubo detrás del conflicto mantenido con Petrel en torno a la pérdida de una porción de territorio, las tensiones no debieron serlo tanto por esas hectáreas que dejaban de pertenecer a su término, como porque en ellas se ubicaba una extraordinaria zona de pastos y leñas.

No solamente cabría hablar de los pastos como mero aprovechamiento comunal —favorecedor de las capas sociales más frágiles—; también deben considerarse como una importante fuente de ingresos para algunos particulares que conseguían arrendar sus pastizales a ganaderos de otras poblaciones, con las que Alicante mantuvo correspondencia mutua de ellos:

60. AMA., Arm. 3, Legajo 33.

*«que tienen vendidas sus yervas y pastos de sus tierras a diferentes ganaderos que tienen presentado el título de mutua correspondencia de dichos pastos, y siendo ya el tiempo oportuno de lograr los crecidos veneficios que dexan dichos ganados».*⁶¹

c) En cuanto a los conflictos derivados del vino, ya se ha hecho alguna alusión a la trascendencia que tuvo en toda la huerta alicantina tanto la producción de vid como su comercialización.⁶² Representaba un fuerte puntal en la economía de la ciudad y, por tanto, debía defenderlo de la competencia de otras zonas próximas. Con este motivo fueron promulgadas una serie de ordenanzas de carácter proteccionista que regularon todo lo concerniente a la producción vinícola y a su control en el mercado. El primer ordenamiento en este sentido fue un real privilegio otorgado por Fernando el Católico a la ciudad de Alicante en 1510, por el que se prohibía la introducción en la ciudad de vinos procedentes de tierras no incluidas en su jurisdicción.

La *Junta de inhibición de vino forastero* se encargaba de vigilar el estricto cumplimiento de la normativa: terminada la recolección debía desplazarse a las diferentes poblaciones para tomar buena nota del monto de la cosecha y, cuando ésta fuera transportada a la ciudad, un oficial controlaría que la cantidad llevada por cada uno de los cosecheros no excediera, en su total, a la que había quedado registrada. Días después se hacía un pregón recordando los capítulos de la inhibición: cualquier fraude era castigado severamente con penas que iban desde el pago de multas hasta la incautación del vino y demás aparejos.

Con todo, la contravención de la norma fue algo mucho más corriente de lo que cabe pensar.⁶³ El elevado número de litigios localizados puede entenderse como mero botón de muestra de las infracciones que debieron efectuarse y, desde luego, hay que pensar que los introductores clandestinos no se arriesgarían a perder vino y bagajes de no contar con altas probabilidades de éxito.

Los cosecheros lo hicieron a menudo adquiriendo a forasteros vinos de calidad inferior que luego intentaban introducir en la ciudad como de cosecha propia; esta actitud que podía favorecerles de forma personal, iba lógicamente en detrimento del conjunto de los productores: vulneraban la misma reglamentación que ellos habían creado para salvaguardar sus intereses. Aunque, de todas formas, fueron los cosecheros de la huerta de Alicante los que, al poseer mayores superficies de este cultivo, necesitaron de tales medidas proteccionistas; el resto de los pueblos de la gobernación tuvieron que someterse a los dictados de aquéllos pese a que no siempre les favorecieran, lo que supuso una cierta tendencia a quebrantar la ley.

La procedencia del vino que se introducía fraudulentamente era diversa, fundamentalmente de las poblaciones de Monóvar, Jijona, Aspe, Novelda, Elda y Benilloba. También Monforte y Busot aparecen, aunque muy esporádicamente, entre las poblaciones de la general contribución de Alicante que introducen vino ajeno a su cosecha. Estos datos corresponden únicamente a la información obtenida en los casos en

61. AMA., Arm. 9, Libro 53, fol. 238v.

62. GIMÉNEZ LÓPEZ, E.: *Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria en el antiguo régimen*, Valencia, 1981, págs. 150-157 y 312-331.

63. El número de pleitos localizados en el Archivo Municipal de Alicante en relación a las infracciones sobre el vino durante los siglos XVII y XVIII es de 36 y, de ellos, un 50% en el periodo comprendido entre 1720 y 1735.

que se pudo aprehender al infractor: en gran número de ellos esto resultó imposible ya que, al verse los transgresores sorprendidos por las autoridades, abandonaban los cargamentos y se daban a la fuga:

*«Salió acompañado [el comisario] de siete hombres de dicha villa y en la partida nombrada Juncares hizo aprehensión de seis cargas de vino de doce pellejos que conducían seis mulos gobernados por quatro hombres, los cuales se ausentaron e hicieron fuga».*⁶⁴

A veces, después de haber sido retenidos, conseguían huir cuando eran conducidos a la ciudad, aprovechando las dificultades que ofrecía el terreno o cualquier descuido de los guardas, hecho que debía resultar harto frecuente si tenemos en cuenta que éstos debían llevar consigo, además de los delincuentes, los cargamentos requisados y los animales.

En teoría, todo vecino de la ciudad o de los pueblos de la contribución podía aprehender cualquier carga ilegal y llevar a cabo las mismas diligencias que realizaban los oficiales de la Junta, hasta tanto fuera entregado el infractor a las autoridades en la materia.⁶⁵ Esto, unido a que al denunciante se le pagaba un tercio de la pena que resultaba impuesta, sometía a todos —cosecheros, taberneros y consumidores— a un fuerte control de unos sobre otros.

Para poder capturar las entregas clandestinas, era fundamental la figura del delator: su información permitía al comisario del vino y sus subordinados presentarse en el lugar por el que presumiblemente harían su entrada y, de esta manera, poder efectuar la detención; en caso contrario, resultaba sumamente difícil hacer aprehensión alguna, dado que los transgresores, generalmente, se amparaban en la oscuridad de la noche y en complicados parajes para llevar a cabo su tarea.

En los pleitos en que este extremo se ha podido documentar, encontramos que el destino más habitual de estas introducciones fueron taberneros de San Juan, de Muchamiel, del barrio de San Antón en Alicante, el tendero de Benimagrell y, casi todos ellos, en más de una ocasión. En teoría sólo podían vender vino adquirido a los cosecheros del término, pero si se obtenía en otras comarcas más barato y además se evitaba el pago del derecho de entrada a la ciudad, se podía conseguir un precio de salida mucho más bajo que el establecido. Este hecho justificaba el que dicha actitud fraudulenta contara con la complicidad del consumidor de nivel económico más bajo.

No resultó raro que los introductores hicieran uso de las armas en los actos de detención, aunque los menos violentos —ante la pérdida de la carga y animales y como último recurso antes de intentar la huida— trataban de persuadir a las autoridades de que no les animaba una finalidad lucrativa, inventando a veces pretextos jocosos como el de tener licencia —falsa, por supuesto— a favor del «reverendo padre guardián del convento de Nuestra Señora de Gracia» por la cual se le permitía la entrada de 50 cántaros de vino para consumo de la comunidad de religiosos; en otra ocasión, cuando se le preguntó al presunto infractor por el contenido de la carga dijo tratarse de aceite, mas al descubrirse que eran pellejos de vino, el individuo trató de defenderse

64. AMA., Arm. 3, Legajo 22, Pieza 10: *Autos sobre aprehensión del vino forastero*. 1725.

65. AHN., Consejos, Legajo 22.071, Pieza nº 4, *Capítols pera el govern de la Inibició del ví foraster de la ciutat de Alacant, fets per los Il·lustres justícia, jurats, síndic y junta de interesats, aprovats per lo rey nostre senyor*. 1723.

argumentando que la «llevaban para una huelga o regosijo» aunque, curiosamente, la persona que lo conducía era hermano de un tendero del arraval de San Antón, lo que hace pensar que el destino fuera efectivamente otro.

Entre los quehaceres asignados al comisario del vino estaba también el de reconocer las tabernas de la ciudad y demás poblaciones del término para ver si hallaba en ellas algún indicio de existencia de vino forastero, aunque la visita también podía estar motivada por una denuncia previa. En tales casos solía desplazarse el comisario, un escribano y dos o tres maestros toneleros, prácticos en el conocimiento y cata del vino; se pedía la extracción de una cantidad procedente del recipiente que resultara sospechoso y, una vez probado, los expertos «después de haberse reflexionado sobre el gusto, y hecho las demás pruebas que les parecieron convenientes; mediante juramento (...) y a una señal de la cruz, (...) unánimes y conformes dixerón que era vino forastero».⁶⁶ Si el tabernero se oponía, ambas partes designaban nuevos peritos y, mientras que los nombrados por el comisario confirmaban el veredicto de los anteriores, los elegidos por el tabernero insistían en la versión de éste: «que no se halla resabio alguno por donde se pueda proferir ser forastero y que tiene por cierto es de la cosecha de la huerta de esta ciudad y que así lo siente y declara...». Por fin, el comisario se veía obligado a decidir.

Finalmente, no quisiera pasar por alto la simple referencia a otras cuestiones tratadas en nuestro trabajo que, aunque con menor intensidad, promovieron algún que otro encontronazo entre los municipios, alterando en algunos momentos la relación vecinal existente: en este grupo incluimos los asuntos referentes a contribuciones fiscales como el *equivalente* y los relativos a los excesos cometidos por algunas poblaciones —Elche y Orihuela fundamentalmente— pretendiendo embarcar o desembarcar en sus costas respectivas, y sin licencia, productos destinados al comercio. Esto resultaba oneroso para la ciudad de Alicante, cuyo puerto monopolizaba todas las entradas y salidas del tramo de costa comprendido entre Denia y Cartagena.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Cuando en 1490 Fernando el Católico otorgaba a la villa de Alicante el título de *ciudad*, ésta disponía ya de unos términos que le habían sido concedidos dos siglos y medio antes por Alfonso X. Con el aumento demográfico del Quinientos muchos de esos lugares fueron adquiriendo una entidad que les permitió sufragar y mantener ciertos niveles de autonomía con relación a la ciudad de Alicante.

Y esta circunstancia abrió la puerta a una serie de conflictos a lo largo de toda la Edad Moderna, un continuo tira y afloja —que recogen fielmente los numerosos pleitos— entre las instancias de la ciudad y los municipios de su término: éstos, intentando alcanzar su egresión municipal que, después de conseguida, querrán afianzar con nuevas competencias; aquélla, frenando, en la medida de lo posible, las aspiraciones de dichos lugares. En definitiva, se trataba de una pugna de poderes en que la parte que poseía mayor fuerza o mayor celo fue la que salió más airosa en cada momento.

Estos enfrentamientos llegaron a plantear situaciones personales un tanto contradictorias: en su condición de vecino de Agost, por ejemplo, éste debía sometimiento a

66. AMA. Arm. 3, Legajo 22, Pieza 12: *Autos fulminados de oficio contra Francisco Rolando, tavernero, sobre haverse encontrado en su casa vino forastero.*

su señor y, por ello, estaba obligado a apoyarle en los pleitos jurisdiccionales que mantuviera frente a la ciudad. Por otra parte, esta misma circunstancia podía actuar en su contra si la ciudad, en represalia, le restringía –como de hecho llegó a ocurrir– la entrada de vinos o el derecho de embarque en el puerto –bazas utilizadas hábilmente por la ciudad para socavar los ánimos contestatarios de los habitantes de dichos municipios–. De tal forma que podía llegar a darse la curiosa circunstancia de que el mismo vecino, en cuanto a sus intereses personales, se sintiera más próximo a la causa de la ciudad que a la de su propio señor.

Y abundando en el campo de lo contradictorio, habría que citar cómo gran parte de los dueños de señoríos próximos a la ciudad fueron personajes muy implicados en la administración de la misma, ejerciendo diversos cargos municipales, lo que les obligaba a actuar en defensa de unos intereses que, en no pocas ocasiones, entraban en oposición con los suyos propios. Sin embargo, esa posición privilegiada debió facilitarles, a buen seguro, muchos de sus logros como señores de vasallos.

Las discrepancias vecinales tuvieron también su reflejo en el aspecto territorial; el cabildo alicantino siempre barrió para casa y, en los diferentes amojonamientos efectuados, siempre se negó a reconocer a los señoríos alfonsinos mayor territorio del que poseían en 1329 tras la promulgación del fuero de Alfonso II. Evidentemente, sus titulares pleitearon incansablemente en defensa de aquellas tierras adquiridas con posterioridad y de las cuales se consideraban dueños legítimos.

De igual modo, cuando las poblaciones realengas obtuvieron su independencia, la ciudad, ante lo inevitable del hecho, centraba todos sus esfuerzos en obtener el máximo beneficio posible: de esta manera se convirtió en una práctica habitual que, en tales ocasiones, tratara de conseguir algunos enclaves de especial interés: así ocurrió con San Juan, a quien consiguió arrebatarse la partida de Santa Faz, de importancia económica para la ciudad por su monasterio; también logró que, al deslindar San Vicente del Raspeig, quedaran para Alicante tres de las ocho partidas con que contaba su parroquia; y con esta misma fórmula, el cabildo alicantino pudo recuperar en su favor los Baños situados en la partida de Aguas Altas.

Pese a todo, el análisis de las poblaciones de la general contribución de Alicante nos revela una situación, bastante característica, en que las tensiones internas mantenidas a lo largo de los siglos no fueron óbice para que, sin embargo, unas y otra se necesitaran mutuamente y fueran capaces de plantear un sólido frente común respecto a otras localidades circunvecinas. Estos elementos aglutinantes ya aludidos –aguas de riego, pastos y vinos, fundamentalmente– ponen de relieve, como corolario, esa cohesión frente a terceros que tiene su fundamento en el antiguo privilegio de Alfonso X.